



El titular de Justicia, en su despacho, en el que tiene varias fotografías de la presidenta del Gobierno regional

## «Ha llegado la hora de hacer un plan de choque para modernizar la Justicia»

Alfredo Prada — Consejero de Justicia y Administraciones Públicas

POR M. J. ALVAREZ  
FOTO CHEMA BARRIOS

MADRID. El cuadro de La muerte de Lucrecia preside su despacho. No en vano dirige la consejería de Justicia, de la que heredó la patria romana, violada por el hijo del último rey. De su afición al arte español contemporáneo, dan fe las pinturas de Miró y Canogar. Tres años, una de ellas dedicada, atestiguan su larga amistad con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. De su León natal, en donde fue secretario general del PP, Alfredo Prada (1958), dio el salto a la política nacional en 1993. En 2000 pasó a la secretaría general del PP en el Senado, primero, y a vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara Alta durante la etapa Aguirre, después. Desde 2003 ocupa la vicepresidencia segunda en el Gobierno regional.

—¿Se ha sentido agravado cuando Aguirre decidió llevarse las competencias de Interior a Presidencia?

—En absoluto. Me he sentido muy satisfecho de que me llamara para seguir formando parte de su Gobierno y continuar como vicepresidente.

—¿Qué piensa de lo ocurrido en el Metro? ¿Le preocupa el repunte

de grupos de ideología radical en la región?

—Lo que ocurrió no fue una pelea entre bandas. Fue un asesinato realizado por un individuo que viajaba solo. Lo que es preocupante es que haya tantos episodios de violencia que hay que condenar y que, además, rompen el espíritu de lo que es Madrid: una región abierta y solidaria.

—¿La Delegación del Gobierno combate esa violencia con eficacia?

—Yo creo que sí. Aunque tiene un déficit crónico de falta de recursos humanos y materiales que el Gobierno de Zapatero ha sido incapaz de solucionar por falta de voluntad política.

—¿Cómo combatirlos? ¿Hacen falta medidas policiales, además de las educativas y sociales?

—La Comunidad hace enormes esfuerzos en materia de medidas de integración, sociales y educativas que hay que seguir reforzando. A la delincuencia, en general, hay que combatir, especialmente con más medios por parte de la Fuerzas de Seguridad.

—¿Los menores en la Comunidad delinquen más?

—Sí. La Fiscalía en su memoria detectó un incremento en la franja de 14 a 19 años. Y apunta a que cada vez se rebajaba

más la edad de inicio. Frente a este dato, cabe destacar los esfuerzos del Gobierno regional para la reeducación y la reinserción de los menores infractores, en donde hemos rehabilitado al 83% de los jóvenes que han pasado por nuestros centros. Eso nos da confianza.

—Ramón, otro de los condenados por el crimen de Sandra Puig, podría quedar en libertad en breve. ¿Afectará a la denuncia sobre el caso que ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

—Será el juez quien decida si sigue ingresado o sale en libertad vigilada. En cualquier caso, es una prueba más de que nuestra petición de aumentar las penas

en los delitos más graves: asesinato, violación y terrorismo, es una demanda acertada. Y que cuando el menor cumpla la mayoría de edad ingrese en la cárcel ordinaria. Un país democrático no puede permitirse el lujo, en el contexto de un Estado de Derecho, de que una persona que ha cometido tan graves delitos a los cuatro años esté en libertad. Esta es una de las lagunas de la Ley Penal del Menor.

—Sin embargo, el Gobierno del PSOE no está por la labor de modificar la ley.

—Sí, pero en marzo hay elecciones. Esperemos que este sea uno de los puntos que la nueva

legislatura permita corregir. —El fiscal jefe de Madrid ha dicho que el 61% de quienes pasaron a disposición judicial por delinquir en 2006 eran extranjeros (No lo considera preocupante?)

—Es falso equiparar inmigración y delincuencia. Sería la reflexión más injusta que alguien pudiera realizar. El delincuente lo es al margen de su origen o procedencia. Lo que el fiscal jefe quiso apuntar, sobre unos datos objetivos, era la tendencia de grupos o bandas organizadas que antes no existían aquí, como las latinas o la de los albanos kosovares.

—La legislación anterior fue la de las Bescam y la del Campus de la Justicia. ¿Cuáles son los retos de ésta?

—Las Bescam hoy son una realidad y un gran éxito con 2.500

nuevos policías en más de un centenar de municipios haciendo funciones y labores de seguridad ciudadana. Y el Campus está encauzado el proyecto y la construcción en marcha. El reto estaría en que, además, de acabarlo y llevar las nuevas tecnologías a la administración de justicia poner las bases para modernizarla, que Madrid tenga una justicia ágil, eficaz, de calidad y que resuelva los problemas de los ciudadanos.

—¿Cómo van los plazos del Campus; no va con retraso?

—No sólo no llevamos retraso, sino que hemos hecho una gestión admirada por muchos. La previsión era ubicarlo en los terrenos de la Operación Chamartín, que está parada. Si no hubiésemos decidido cambiar su emplazamiento ni siquiera hubiésemos empezado el proyecto. Nos marcamos un plazo de inicio, pero no de finalización; no lo podremos hacer hasta que no contratemos todos los edificios. Algunos estarán a partir de 2009.

—El Colegio de Arquitectos ha criticado que al proyecto se le ha dado mucho bombo y no ha contado con los autores madrileños.

—Eso fue en su origen pero se solventó de inmediato ya que a la vez que se ha contratado a Norman Foster se ha hecho lo propio con arquitectos madrileños. Los concursos los hacemos en colaboración con el Colegio de Arquitectos y, en el último ha ganado, por unanimidad,

«Zapatero ha sido incapaz de dotar de más medios a la Delegación del Gobierno»

«El Ministerio de Justicia, por razones políticas, no ha respondido a nuestras reivindicaciones»

dad del jurado, una diseñadora de prestigio internacional: Zaida Hadid. El Campus es hoy un proyecto pacífico desde el punto de vista de su desarrollo arquitectónico y no suscita críticas de la oposición.

— ¿No cree que corre el riesgo de retrasarse con arquitectos como Hadid, cuyas obras llevan retraso en otros puntos del país?

— Su arquitectura es compleja, sofisticada y muy vanguardista. Hay que confiar en que no haya problemas en su desarrollo. El esfuerzo va a merecer la pena. Por vez primera estamos construyendo un espacio judicial que, además de darle la solemnidad propia de la administración de justicia, conjuga la funcionalidad con el valor patrimonial, cultural y arquitectónico. Hemos construido un espacio único en el mundo.

— Uno de los frentes que tiene abiertos es en su propia casa, con la huelga de dos mil funcionarios de Justicia.

— Hay movilizaciones de claro contenido político. Y esta no tiene sentido porque el convenio colectivo está en vigor hasta el 31 de diciembre y estamos negociando el nuevo. Comparto parte de sus reivindicaciones y estamos dispuestos al diálogo. No obstante, la huelga no solo afecta a esta Comunidad sino a todas las que tienen competencias en la materia. Es cierto que falta personal y que hay muchos interinos, pero es el Ministerio de Justicia el que tiene que convocar las oposiciones. Mientras no lo haga y sigamos creando nuevos juzgados habrá que meter interinos.

— ¿Cómo afecta un ministro como Fernández Bermejo a la región?

— Hasta la fecha ha sido neutro. Me gustaría que diera un gran impulso a la modernización que desde el gobierno regional queremos dar a la administración de justicia.

— ¿Cómo tienen que ser los ministros de Justicia para que el mal endémico de falta de medios se resuelva?

— Ha llegado el momento de hacer el gran plan de choque de la Administración de Justicia, en cierta medida revolucionario. Hay que hacer un plan de choque que sirva de impulso para adecuar la administración de justicia al siglo XXI. Hace falta una nueva legislación procesal penal y una ley de enjuiciamiento criminal modernas, ágiles y entendibles. Además, utilizar las nuevas tecnologías e infraestructuras y tener en cuenta el papel de las comunidades autónomas.

— ¿Ha habido voluntad política de que esto mejore?

— No. El propio presidente del TSJM alabó el esfuerzo del Gobierno regional. Pero se necesita un incremento de la planta judicial. No es de recibo que un gobierno que financia el 100% de un juzgado hasta su apertura

ra y luego el 80% de su coste no tenga la capacidad de determinar qué juzgados, cuántos, de qué jurisdicciones y en qué lugar se van a instalar. La Comunidad no tiene esa capacidad; la tiene el Gobierno central. Lamentablemente el Ministerio, por razones políticas, en estos tres últimos años no ha respondido a nuestras reivindicaciones. Carecemos de juzgados y la misma situación se produce en la demarcación judicial, que no se ha modificado; corresponde al Ministerio de Justicia que nos ha cerrado las puertas permanentemente.

— ¿Cómo son sus relaciones con la titular de Administraciones Públicas?

— Con Elena Salgado, inexistentes hasta la fecha. Con Bermejo es buena. No obstante, lo importante es el papel institucional que el Gobierno de la nación dé una respuesta adecuada a las necesidades que tiene Madrid.